

Entre subsistencias y neoextractivismos locales. Dinámicas mineras en el Norte del Cauca, Colombia*

Inge Helena Valencia Peña (Colombia)**

Laura Silva Chica (Colombia)***

Resumen

Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos que hoy envuelven la zona norte del departamento del Cauca, como una región donde confluyen actores armados ilegales y actores sociales de gran importancia, como poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, este artículo tiene como objetivo comprender la manera en que las transformaciones productivas ocurridas en torno a la extracción aurífera han dado origen a nuevas formas extractivas locales. Estas nuevas formas de extractivismo local sustentadas en la noción de modernidades alternativas invitan a comprender la manera en que campesinos mineros afrodescendientes, ahora empresarios del oro, hacen su vida posible en un territorio altamente disputado por actores externos. A partir de un enfoque metodológico sustentado en el análisis etnográfico, se busca conocer las transformaciones de las dinámicas mineras de la región y la manera como reconfiguran relaciones económicas y políticas, en una de las regiones estratégicas para el posconflicto en Colombia.

Palabras clave

Extractivismo; Resistencias Locales; Conflicto Armado; Orden Crimilegal; Norte del Cauca, Colombia.

Fecha de recepción: agosto de 2017 • **Fecha de aprobación:** noviembre de 2017

* Este artículo es resultado de la investigación *Minería de enclave extractivo ilegal: retos del ordenamiento territorial para el posconflicto*, financiada por la Universidad Icesi 2017-2018. En él se presentan algunos hallazgos preliminares de lo que ha sido el trabajo realizado en el Norte del Cauca.

** Antropóloga. Doctora en Antropología Social. Profesora investigadora y jefa del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi, Cali, Colombia. Correo electrónico: ihvalencia@icesi.edu.co

*** Antropóloga. Magíster en Estudios Sociales y Políticos. Correo electrónico: laura.silva.chica@gmail.com

Cómo citar este artículo

Valencia Peña, Inge Helena y Silva Chica, Laura. (2018). Entre subsistencias y neoextractivismos locales. Dinámicas mineras en el Norte del Cauca, Colombia. *Estudios Políticos* (Universidad de Antioquia), 52, pp. 172-193. <http://doi.org/10.17533/udea.espo.n52a09>

Between Subsistences and Local Neo-Extractivism. Mining Dynamics in Northern Cauca, Colombia

Abstract

Considering the complexity of the processes that surround the northern part of the Cauca department, as a region where illegal armed actors and social actors of great importance such as Afro-descendant, indigenous and peasant populations converge, this article aims to understand the way in which the productive transformations that took place around the gold extraction originated new local extractive forms. These forms of local neo-extractivism, supported by the notion of alternative modernities, allows us to explain how the Afro-descendant mining peasants—now gold entrepreneurs—make their living in a territory highly disputed by external actors. We will also analyze how these new extractivisms reconfigure economic and political relations in one of the strategic regions for the Colombian post-conflict.

[173]

Keywords

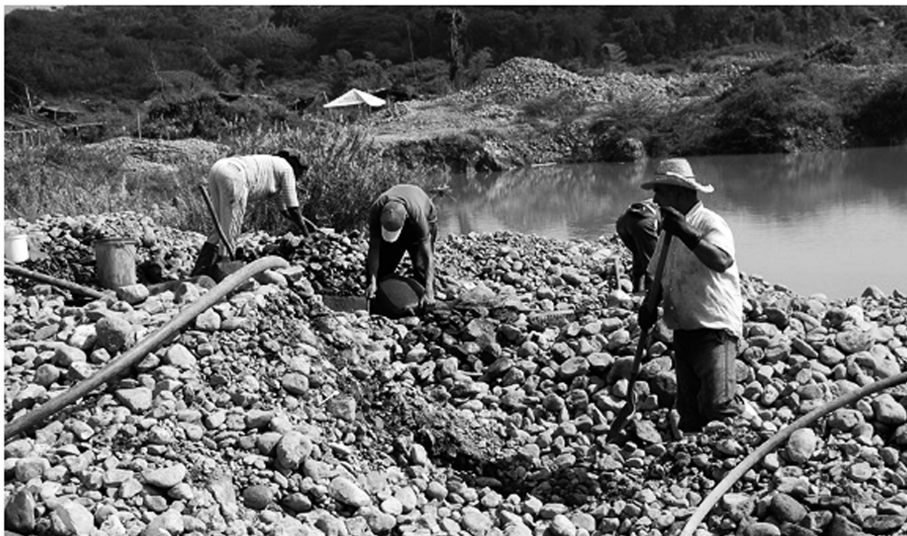
Extractivism; Local Resistances; Armed Conflict; Crimilegal Order; Northern Cauca, Colombia.

Introducción

Parado en medio de una montaña de rocas, Esteban¹ —miembro del Consejo Comunitario del Zanjón del Garrapatero y Concejal de Santander de Quilichao— mira hacia el horizonte. A su alrededor, un grupo de «paisas» —como suelen llamar los afrocolombianos a la gente «blanca» migrante que llega a sus territorios— extraen desde un orificio de un metro por un metro de ancho y de aproximadamente diez metros de profundidad, un balde de plástico cargado de piedra y tierra haciendo uso de una polea sencilla. «El oro de aquí tiene muy buena ley, es de muy buena calidad. Por eso la situación es tan compleja, entre más bueno el oro más manos hay detrás de él». Esteban explica que bajo tierra se encuentran en ese momento nueve hombres cavando túneles mientras sacan las vetas de roca donde se encuentra el oro. «El temor hoy es que hay mucha lluvia y está aumentando la presión del agua del río Quinamayó sobre los túneles. Entonces todo ese peso va en algún momento a derrumbarse allá abajo. Hay muchos túneles y algunos ya se están encontrando» (Esteban Ararat, comunicación personal, agosto 16, 2016).

[174]

Foto 1. Mina Agualimpia, Santander de Quilichao, 2016.



Fuente: Laura Silva Chica, archivo personal.

¹ Los nombres de las personas y algunas de las organizaciones citadas en este artículo han sido cambiadas para garantizar su seguridad en una región con presencia de actores armados ilegales como es el Norte del Cauca.

El 30 de abril de 2014 ocurrió el derrumbe de la mina Agualimpia en el municipio de Santander de Quilichao, un pequeño poblado que concentra y jalona las dinámicas económicas, sociales y políticas del Norte del Cauca, al suroccidente de Colombia. Este evento, no solo logró remover la tierra y los cuerpos de las personas que se encontraban trabajando en las entrañas de la mina, sino que además generó una ruptura en la percepción de las personas sobre la minería como una actividad que favorecería el progreso en la región. De acuerdo con los relatos de líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y de habitantes del municipio de Santander de Quilichao recolectados durante el trabajo de campo realizado durante 2015 y 2016, en el derrumbe murieron alrededor de veinte personas² luego de que uno de los túneles colapsara al llenarse de agua, lo cual hizo que muchos habitantes de la región rechazaran la continuidad de la actividad minera. Sin embargo, hoy hay quienes siguen creyendo que la minería debe continuarse y, además, que la mina entre más muertos tenga, más oro da.

Con el derrumbe no solo se rompió la tierra sino el tejido social y la solidaridad en la comunidad. [...] Hoy aquí el señor que tiene la plata trae la máquina, trae la clasificadora, trae los motores y trae las armas; o sea, trae todo un montaje y dice yo pongo esto, usted pone la tierra y en contraprestación yo lo que le pago es esto, al que pone la tierra le dan un porcentaje sobre lo que deja la actividad minera (Esteban Ararat, comunicación personal, agosto 16, 2016).

[175]

Es así como en los últimos años hay quienes se vinculan a este tipo de minería porque quieren mayores ganancias y otros que lo hacen porque no tienen opción.

Esta pequeña imagen muestra cómo desde hace algunos años un intenso extractivismo minero que media entre lo legal y lo ilegal ha venido generando profundas divisiones al interior de la población local, y grandes transformaciones en las prácticas productivas y de subsistencia de las comunidades afrodescendientes en la región del Norte del Cauca. Por un lado, el extractivismo legal se ha configurado a partir de la articulación de varias actividades económicas como la minería de oro legal transnacional que vincula grandes empresas mineras extranjeras, el desarrollo del monocultivo de la caña de azúcar y el desarrollo de parques industriales. Por otro lado, el

² La cifra oficial es de doce personas muertas, aunque hubo varios desaparecidos, por eso se afirma que llegaron a veinte (Cruz, 2015, abril 30).

extractivismo ilegal se ha configurado a partir de la proliferación de cultivos ilícitos de coca, la llegada y rápida expansión de la minería ilegal, aquella que no tiene títulos de explotación y que además es controlada por actores armados ilegales, las transacciones asociadas al narcotráfico y el control militar —legal e ilegal— (Valencia, 2017).

En este escenario, la minería artesanal, que hasta hace algún tiempo se caracterizaba por ser una actividad económica de subsistencia propia para las poblaciones afrodescendientes de esta región (Caro, 2014), se ha convertido en un lugar para que actores muy diversos como empresarios externos legales e ilegales, y actores armados ilegales comenzaran a ejercerla. Cada uno ha buscado a toda costa controlar no solo la actividad extractiva y las rentas que se producen, sino también los procesos de ordenamiento social en la región (Valencia, 2017).

Este artículo tiene como objetivo comprender la manera en que las transformaciones productivas ocurridas en torno a la extracción aurífera en este territorio, han dado origen a nuevas formas extractivas locales después de la llegada de actores armados ilegales y empresas multinacionales mineras. También se analizará cómo estos nuevos extractivismos reconfiguran relaciones económicas y políticas en una de las regiones estratégicas para el posconflicto en Colombia.

Los datos aquí presentados son el resultado de un trabajo de campo realizado en la vereda San Antonio de Santander de Quilichao entre 2015 y 2017 y que se dividió en tres momentos: el primero consistió en levantar un mapa de actores clave con los cuales pudiéramos contactarnos para dar inicio a las visitas y al proceso de recolección de datos; luego, de forma paralela, realizamos recorridos por las minas, entrevistas, visitas a las viviendas de algunos empresarios del oro o propietarios de las parcelas, y la recolección de información de fuentes secundarias sobre el tema; en la última etapa sistematizamos la información recolectada y la contrastamos con otros testimonios de actores que hacen parte del sistema local de extracción de oro. De manera transversal, el desarrollo del trabajo de campo que sustenta gran parte de la investigación requirió de nosotras el desarrollo de protocolos de seguridad y consideraciones éticas sobre la manera en que se manejaría la información, una de ellas, conservar el anonimato de los entrevistados. También se logró construir un mapa sobre los actores y usos del suelo utilizando diversas fuentes que serán presentadas más adelante.

El trabajo se realizó a partir de un enfoque metodológico sustentado en el análisis etnográfico que nos permitió entender cómo se organizan en la actualidad las empresas mineras locales en algunas de las zonas rurales del Norte del Cauca, cómo se entretajan los procesos sociales en los que se articulan tradición y modernidad, legalidad e ilegalidad, y cómo les dan vida a nuevos sistemas económicos locales. Por eso, aunque las conclusiones presentadas al final del artículo son el resultado de un proceso de investigación también buscan contribuir a la generación de nuevos interrogantes o problemas de investigación que permitan seguir aportando a la literatura sobre extractivismo y el conflicto armado desde otra perspectiva poco abordada: las subsistencias y los neoextractivismos locales, o la manera en que poblaciones locales apropian nuevas formas extractivas en la región.

1. Problemática minera y conflicto armado en Colombia

La expansión de la industria minera ocurrida desde la década de 1990 en Colombia —y en general en Latinoamérica— como política de Estado responde a un proceso de largo aliento de reprimarización de la economía nacional que busca fortalecer las exportaciones de productos primarios (Rudas, 2010, 27 de agosto). En Colombia, el *boom* minero se ha desarrollado de forma paralela a la llegada de actores armados ilegales, quienes además de hacer su expansión en búsqueda del control territorial a inicios de la década de 2000, también comienzan a vincularse al desarrollo de actividades relacionadas con la minería de enclave extractivo ilegal.

[177]

Desde 1990 hasta 2001 fueron entregados en el país 1889 títulos mineros, mientras que entre 2002 y 2009 la cifra se incrementó a 7869 concesiones correspondientes a 4 839 149 hectáreas y 20 mil solicitudes en trámite. En mayo de 2009 se encontraban solicitadas casi 40 millones de hectáreas —casi 35% del territorio nacional—, lo que da cuenta de un significativo crecimiento del interés por las actividades mineras y extractivas en Colombia (Rudas, 2010, 27 de agosto).

Este *boom* minero coincide a su vez con dos aspectos clave para Colombia: el primero, que Colombia se reconozca como país multicultural, con lo cual las poblaciones afrodescendientes e indígenas empezaron a ser reconocidas como sujetos étnicos merecedores de derechos especiales en cuanto a la titulación territorial. Si bien el reconocimiento ha significado una ganancia, este se ha visto disminuido por situaciones como los grandes

índices de desplazamiento, marginalidad y pobreza,³ así como otras variables asociadas al conflicto armado o al despojo de territorios por parte de macroproyectos e intervenciones públicas y privadas. En el ámbito macrorregional encontramos que el avance en cuanto a la titulación territorial para poblaciones afrodescendientes es frenado debido a la expansión de la titulación minera y a la avanzada del conflicto armado.

El segundo aspecto que se da paralelo a este *boom* minero es el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto armado y al narcotráfico, que en el país se afianza en varias regiones, en este caso en el Pacífico y el Norte del Cauca. El departamento del Cauca es una región geoestratégica en lo que concierne al desarrollo de las dinámicas del conflicto armado, donde confluyen distintos actores que se disputan el ejercicio del control territorial (Guzmán, 2014).

[178] En el caso particular del Norte del Cauca, a finales de la década de 1990, después de la presencia hegemónica de las FARC, irrumpió el paramilitarismo. Hay dos razones para explicar la irrupción de la entrada paramilitar a la región: primero, para disputar el control territorial a las guerrillas; segundo, que la presencia paramilitar está relacionada con los efectos del Plan Colombia sobre las regiones donde había cultivos de coca (Espinosa, 2011). Esto hizo que los grupos paramilitares se desplazaran hacia lugares de poder relacionados con el control y comercio del narcotráfico y de la economía ilegal anclada al desarrollo de diversos megaproyectos a lo largo del Cauca y del Pacífico. El paramilitarismo entró a la región por las zonas norte y centro del departamento. En la zona norte actuaron en los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Suárez a través del bloque Calima, y en Miranda, Caloto y Corinto por medio del bloque Farallones.

En esta región el proceso de reacomodo de los grupos alzados en armas desde mediados de la década de 2000 ha estado atravesado por el auge de la minería ilegal, que ocurre posterior al proceso de paz alcanzado con las Autodefensas Unidas de Colombia (Guzmán y Rodríguez, 2014, pp.

³ Los resultados del estudio *Los municipios hacia los objetivos de desarrollo del milenio* (DNP-PNUD, 2006) demostraron que la región Pacífica posee las peores condiciones de vida del país. De 133 municipios de la región, 117 están por debajo del mínimo constitucional de 67 puntos del índice de calidad de vida (ICV). La región Caribe es, según el mismo estudio, una de las regiones con las peores condiciones de vida después de la región Pacífica. Mantiene un ICV de 72 puntos, inferior al promedio nacional, estimado en 77 puntos (Barcelos *et al.*, 2007 citado en Viáfara *et al.*, 2009).

168-171). Posterior a la desmovilización paramilitar en 2005 se observó en el Norte del Cauca el arraigo de estructuras asociadas a las bandas criminales especializadas en el narcotráfico y en la minería ilegal para continuar ejerciendo su control en la región (Valencia, Silva y Moreno, 2016; Acnur, 2015). Entonces es visible cómo el auge minero ha tendido a agudizarse en lugares donde el conflicto se ha recrudecido, afectando de manera especial a las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Este tipo de minería es un nuevo espacio social de ilegalidad, que las guerrillas y los distintos grupos herederos del paramilitarismo se disputan y capitalizan a partir de su capacidad de influencia sobre la población. El vínculo entre estos diferentes actores con la producción minera ya se ha trazado al señalar la relación directa entre el aumento del precio del oro y la actividad minera ilegal con la tasa de homicidios y los asesinatos (Acnur, 2015). Así, la minería ilegal como espacio de disputa entre los actores armados refleja la debilidad institucional del Estado y el grave impacto que causa a las poblaciones locales (Rettberg y Ortiz, 2014).

Lo que es claro es que la relación entre extractivismo y conflicto armado en el Norte del Cauca nos invita a visibilizar trabajos que han abordado esta relación. Para Macartan Humphreys (2005), por ejemplo, existen por lo menos cinco mecanismos que pueden explicar la relación entre los recursos naturales y el comienzo de una guerra de larga duración. Dentro de estos mecanismos se encuentran: a) la debilidad estatal; b) la viabilidad —los recursos naturales pueden financiar guerras iniciadas por otros motivos—; c) las redes —grado en que los recursos naturales afectan la cotidianidad de las personas y cómo esto define su posición ante los conflictos—; d) el reclamo —la dependencia de los recursos naturales, de hecho, puede estar asociada con quejas en lugar de la codicia—; y e) la codicia de alguien de afuera —no necesariamente son codiciosos los rebeldes, hay terceros como otros Estados, corporaciones y organizaciones interesados en acceder a los recursos naturales—.

[179]

Ahora bien, otras investigaciones se han concentrado en caracterizar dicha relación a partir de la dicotomía legalidad-ilegalidad (Winer y Roule, 2003; Bray, 2003; Le Billon, 2013; Massé y Camargo, 2012; Rettberg y Ortiz, 2014). Quienes se interesan por esta relación buscan comprender el tipo de actores, las estrategias y los impactos de las interacciones legal-ilegal en el crecimiento económico, la corrupción o los niveles de criminalidad

de ciertas regiones, hay quienes afirman que la interacción entre actores o instituciones legales e ilegales puede ser comprendida a partir del análisis de la relación entre conflicto armado y recursos naturales. Aun así, para los investigadores que abordan el asunto desde esta perspectiva, la relación por sí sola no explica el fenómeno. Para ellos, abordar las dinámicas del extractivismo en lugares particulares debe considerar, además, factores históricos, políticos, geográficos y sociales de los escenarios en los cuales se presentan las disputas. Por ello, para entender las transformaciones de las dinámicas mineras, abordaremos la historia de la región del Norte del Cauca para comprender cómo surge la minería como una actividad productiva ligada a la subsistencia de las poblaciones afrodescendientes y cómo se imponen nuevos extractivismos que reconfiguran las relaciones políticas y económicas locales en un contexto marcado, además, por la persistencia del conflicto armado.

2. Norte del Cauca: entre las economías de subsistencia y los extractivismos mineros

[180]

Ubicados al norte del departamento del Cauca se encuentran los municipios de Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto, Villarrica, Guachené, Suárez y Buenos Aires. Allí la minería de oro empezó a consolidarse desde el siglo XVIII como parte del proyecto económico de construcción nacional, pero también como una práctica asociada a la subsistencia y a la libertad de la población esclavizada de origen africano. El trabajo realizado por los pobladores afrodescendientes en las minas ubicadas en las tierras que hoy hacen parte del Norte del Cauca permitió que la región del valle geográfico del río Cauca se vinculara rápidamente al circuito mercantil nacional y se configurara como un centro de poder y movilidad de la fuerza de trabajo entre el valle interandino y el océano Pacífico (Ararat et al., 2013, p. 16).

Los intereses económicos y políticos que dieron forma a esta región se enmarcaron en la explotación minera, que tuvo su complemento en las prácticas agropecuarias. Pese a que los asientos de minas y las grandes haciendas fueron las figuras que durante años determinaron el ordenamiento social y económico de la región, en la segunda mitad del siglo XIX las haciendas nortecaucanas entraron en crisis por el decaimiento del circuito del oro y la abolición de la esclavitud (Vélez, Varela, Rátiva y Salcedo, 2013).

Dado que los mineros y hacendados no podían disponer más de la fuerza de trabajo esclavizada se vieron obligados a negociar con la gente afrodescendiente, buscando formas para promover su permanencia en las tierras mineras y agrícolas. De esta manera, como parte de estas negociaciones, tomó auge la aparcería como sistema de cambio de mano de obra por precarios derechos al usufructo de la tierra (Ararat et al., 2013, p. 18). Al terminar la esclavitud los recursos más importantes de los que disponían los afrodescendientes libres eran sus conocimientos sobre las diversas actividades productivas y su fuerza de trabajo, que utilizaron posteriormente para recrear y configurar su propio territorio. De esta manera los pobladores afrodescendientes del Norte del Cauca empezaron a organizarse social y económicamente, dándole continuidad a prácticas como la minería y la agricultura, ahora la base fundamental de lo que se conoce como la *finca tradicional de subsistencia nortecaucana*.

La finca tradicional permitió que los afrodescendientes se establecieran de manera duradera en este territorio. Es así como la tierra se relaciona entonces con la consecución de la autonomía, reforzando una representación sobre su valor asociado a la libertad y a la autonomía que se comparte con otras poblaciones afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Así, la propiedad de la tierra asegura la pervivencia del grupo familiar e instaura una continuidad que trasciende el carácter efímero de la existencia individual (Wilson, 2004; Chivallon, 2008).

[181]

En el caso de la minería tradicional puede decirse que esta ha representado históricamente una parte fundamental de los sistemas tradicionales de subsistencia de las comunidades afrodescendientes de Colombia y del norte del departamento del Cauca. Para el caso de la minería artesanal, Nina S. de Friedemann y Mónica Espinosa (1994) reconstruyen la manera como la minería permitió no solo que algunos reunieran el oro necesario para comprar su libertad y su tierra, sino que se fueran estableciendo comunidades en terrenos mineros a lo largo de los ríos, para seguir extrayendo el metal como actividad de subsistencia que combinaban con la agricultura. De esta manera, en el Norte del Cauca la minería artesanal y la agricultura se organizaron al interior de fincas tradicionales, las cuales aparecen como propiedad familiar incorporada a la memoria comunal de la población afrodescendiente desde hace más de 150 años (Jaramillo, Londoño y Sánchez, 2015).

3. Las transformaciones en los extractivismos mineros en el Norte del Cauca

Para comienzos del siglo xx se dio inicio al proceso de establecimiento de las haciendas cañeras. La entrada del proceso de industrialización a escala nacional detonó lo que algunos han denominado como el proceso de proletarianización o descomposición del campesinado afrodescendiente. En este caso, los campesinos comenzaron a ser despojados de sus tierras para ser sembradas con caña de azúcar y dar paso a uno de los grandes proyectos extractivistas de la región (Taussig y Rubbo, 2011).

Este proceso de despojo territorial se intensificó desde la década de 1940 con la ampliación de las fincas de mestizos provenientes de la ciudad de Cali y la llegada de una nueva oligarquía comercial que empezó a concentrar tierras, primero a través de la ampliación de los trapiches paneleros en las décadas de 1940 y 1950, para luego continuar en la década de 1960 con su modernización y la conformación de grandes ingenios azucareros mediante inversión de capital del naciente empresariado caleño y extranjero.⁴ Esto trajo como corolario que gran parte de la población afrodescendiente oriunda de la zona se viera obligada a trabajar temporalmente en la industria azucarera por el pago de un salario, combinándolo con el trabajo en las fincas, las cuales, por lo reducidas que quedaron,⁵ eran insuficientes para la subsistencia familiar (Taussig y Rubbo, 2011). Esto refleja el paso de una región con una tradición económica de subsistencia campesina a una región donde predomina una estructura productiva basada en relaciones salariales y capitalistas con orientación exportadora. De esta manera los ingenios contribuyeron a seguir proletarianizando a las poblaciones afrodescendientes, aunque algunas persisten con la realización de actividades de subsistencia relacionadas con el desarrollo de actividades agrícolas y, sobretudo, de la minería tradicional.

⁴ La historia de la familia Eder, y hasta cierto punto la de otros norteamericanos como los Barneys y los Simmonds, demuestra cómo el comercio extranjero penetró en el Valle, permitiendo a estos comerciantes hacer sus fortunas sin tener que correr el riesgo de invertir en grandes haciendas con escasez de «brazos». Con el dinero de sus actividades comerciales y la ruina de las antiguas familias del Cauca pudieron adquirir grandes porciones de tierra fértil (Aprile, 1994, p. 67).

⁵ Por ejemplo, «el tamaño promedio de la finca campesina en Puerto Tejada pasó de 4.8 has en 1933 a 0.32 has en 1967; por otra parte, las propiedades campesinas en 1933 fluctuaban entre 3.2 y 6.4 has, en 1958 entre 0.64 y 1.3 has, y en 1964 a menos de 0.64 has» (Taussig y Rubbo, 1975, citados en Urrea y Hurtado, 1997, pp. 199).

En la actualidad, los proyectos extractivistas se sustentan en el desarrollo de la minería tanto legal como ilegal de oro y de otros recursos presentes en las tierras del Norte del Cauca. La expansión del cultivo de caña de azúcar, el crecimiento de las zonas industriales impulsadas por el Estado, la construcción de la hidroeléctrica La Salvajina —la cual se llevó a cabo en tierras donde las comunidades afrodescendientes trabajaban la agricultura y la minería tradicional—, el fortalecimiento de una importante economía ilegal sustentada en el cultivo de hoja de coca y el resurgimiento de la minería transnacional e ilegal —aquella controlada por actores armados ilegales— son algunos de los procesos extractivos que se articulan y que han venido transformando el ordenamiento social del Norte del Cauca. Es aquí que entran en tensión dinámicas legales e ilegales que afectan de manera directa las territorialidades y formas de subsistencia de las poblaciones afronortecaucanas.

4. **Minería *crimilegal*: entre el enclave extractivo ilegal y transnacional en el Norte del Cauca**

Actualmente, la presencia de la agroindustria y el renovado extractivismo minero han transformado radicalmente las prácticas económicas tradicionales de subsistencia, obligando a la población afronortecaucana a dirigir sus esfuerzos productivos hacia la explotación de recursos naturales. Después de analizar el origen de la minería de subsistencia ligada a la presencia de las poblaciones afrodescendientes es remarcable cómo la expansión de la minería transnacional e ilegal⁶ en el Norte del Cauca tomó fuerza a principios del siglo xxi.

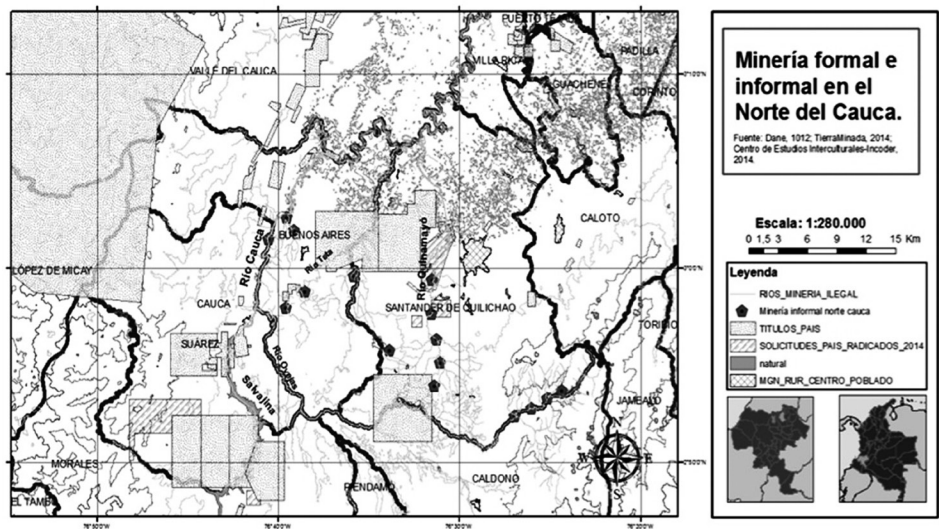
[183]

En el caso de la zona alta montañosa, la entrada de las transnacionales mineras se dio de forma paralela a la entrada del paramilitarismo a comienzos de 2000. En 2004 la multinacional Anglo Gold Ashanti obtuvo una titulación de 50 mil hectáreas entre los municipios de Suárez y Buenos Aires para la explotación de oro y otros minerales sin haberse realizado la consulta previa correspondiente (Vélez et al., 2013). A ello hay que sumar que en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao el Gobierno hizo entrega de 33 títulos mineros, los cuales cubren un área cercana a las

⁶ La minería ilegal es aquella que se desarrolla sin contar con el registro, la licencia o el título minero requerido por el Registro Nacional Minero. Por otra parte, la minería transnacional hace referencia a la extracción llevada a cabo por empresas transnacionales en territorio nacional (Ministerio de Minas y Energía, 2015).

20 mil hectáreas. De ellos, 17 corresponden a explotaciones de minerales como el oro, la plata y el cobre. En Santander de Quilichao el Gobierno entregó otros cuatro títulos que cubren una área de aproximadamente 6939,79 has, de las cuales dos se dedican a extraer oro. Después de este boom de entrega de títulos legales, a partir de 2004 empezaron a llegar a los territorios actores armados ilegales, herederos del fenómeno del paramilitarismo, quienes aprovecharon el abandono de algunos de los títulos legales para ejercer allí su explotación (Alexander Carabalí, comunicación personal, diciembre, 2016).

Mapa 1. Minería formal e informal en el Norte del Cauca.



Fuente: elaborado por el asistente de investigación Esteban Tello en el marco del proyecto de la Universidad Icesi *Minería de enclave extractivo ilegal: retos del ordenamiento territorial para el posconflicto 2017*.

En aquella época coincidieron en el territorio el frente Jacobo Arenas de las FARC, el ELN, bandas criminales y las grandes empresas mineras, que se disputaban el control territorial para implementar estrategias en función de sus intereses particulares (López, 2014). El arrendamiento de parcelas a cambio de la obtención de un porcentaje del total de oro lavado, las amenazas y los sobornos a miembros de las comunidades, y la compra a muy bajos precios de los predios permitieron el anclaje de la actividad minera ilegal en Santander de Quilichao, en lugares como San Antonio, El Palmar y

Santa Lucía. Según habitantes de San Antonio, a la vereda llegaron personas en carros lujosos con ponchos y maletas llenas de plata, ofreciéndole a la gente dinero y trabajo a cambio de dejarlos extraer oro de sus propiedades. Antes de llegar a San Antonio, la minería ilegal había pasado por la vereda La Toma —Suárez— y luego bajó hasta el Palmar y Santa Lucía —Santander de Quilichao—, siguiendo el cauce de los ríos Quinamayó, Agualimpia y Mandivá (Alexander Carabalí, comunicación personal, diciembre 2016).

También es de resaltar que desde 2008 la violencia se intensificó y alcanzó su pico más alto en el periodo comprendido entre 2012 y 2015 (Acnur, 2015). Sin embargo, en 2014 el derrumbe ocurrido en la mina de oro de Agualimpia ubicada en la vereda San Antonio fue un punto de inflexión en el rumbo de esta práctica en la zona. El incidente en el que murieron decenas de mineros que se encontraban trabajando fue atribuido a la falta de condiciones técnicas en el proceso de extracción que venían llevando a cabo los actores armados ilegales (Alexander Carabalí, comunicación personal, diciembre 2016).

Y aunque luego del desastre la fuerza pública intervino expulsando la mayor parte de las retroexcavadoras que se encontraban funcionando de manera ilegal, hay quienes afirman que esto no fue un impedimento para que los dueños de las máquinas continuaran invirtiendo en el negocio de la minería y sacando ganancias. Para ese entonces se incrementó la migración hacia San Antonio de personas provenientes de Suárez, Buenos Aires y algunas zonas del suroccidente de Antioquia, como mano de obra para extraer el oro de la tierra de San Antonio. En medio del caos del derrumbe, varias organizaciones sociales como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN) realizaron denuncias y lograron que la Policía y el Ejército realizaran un operativo en varias minas ilegales del lugar (Alexander Carabalí, comunicación personal, diciembre 2016).

[185]

Después de la tragedia los pobladores locales se dividieron entre quienes estaban de acuerdo en continuar con el barequeo⁷ y quienes no. En el caso de municipios de la zona alta del Norte del Cauca como Suárez, donde los Consejos Comunitarios defienden la actividad minera en tanto

⁷ El barequeo, regulado por el artículo 155 del Código de Minas, se refiere al proceso a través del cual los habitantes de terrenos aluviales realizan el lavado de arenas por medios manuales con el fin de separar y recoger metales preciosos allí contenidos (Procuraduría General de la Nación, 2012).

práctica tradicional de subsistencia, el derrumbe les dio herramientas para ampliar su discurso de denuncia de la minería ilegal como una forma de despojo que transgrede sus derechos como comunidad. Sin embargo, en Santander de Quilichao —zona plana— lo sucedido sirvió para reorientar la extracción del enclave a la creación de empresas mineras por parte de pobladores locales, bajo la idea de que esta podría convertirse en una oportunidad para construir una empresa local que permitiera mejorar las condiciones de vida de los pobladores. De esta manera se creó la empresa minera ATO, a partir de la asociación de los dueños de los predios donde las minas habían estado operando (Alexander Carabalí, comunicación personal, diciembre 2016).

[186]

En el caso de este tipo de minería en el Norte del Cauca encontramos que el desarrollo de la minería ilegal se logra y posibilita por varias situaciones: primero, por la existencia de titulaciones legales para exploración y explotación que otorga el Estado, y que al ser abandonadas por algunas empresas transnacionales como Anglogold Ashanti se convierten en espacios idóneos para ser ocupados por los actores armados ilegales que llegan a ocupar los títulos y de esta manera asegurar rentas y control territorial; segundo, a partir de la asociación entre cooperativas locales y empresas mineras nacionales foráneas, que en el proceso de lograr controlar las actividades mineras realizan transacciones sociales de tipo económico y político, que muchas veces van en detrimento de las comunidades mineras artesanales, profundizando algunos de los conflictos en la región (Alexander Carabalí, comunicación personal, diciembre 2016). Es así como el *boom* de la minería aurífera en Colombia ha generado nuevas disputas por el acceso a los recursos y las rentas que produce, disputando además la vocación territorial de los lugares donde se realiza. Los actores armados ilegales han visto en este tipo de economías extractivas un canal para sustentar sus actividades, lo que ha llevado a que la minería se convierta en combustible del conflicto armado (Rettberg y Ortíz, 2014; Massé y Camargo, 2012).

En este caso podemos afirmar que esta minería que articula dinámicas tanto legales —provenientes de la titulación a empresas transnacionales— como ilegales —de la minería controlada por actores armados— configura un orden *crimilegal*. La crimilegalidad propuesta por Markus Schultze-Kraft (2016), en tanto enfoque teórico, fusiona tres categorías que hasta ahora habían permanecido separadas: legalidad, ilegalidad y criminalidad. Así pues, para Schultze-Kraft los órdenes crimilegales se refieren a las

«estructuras, mecanismos y procesos de gobernanza que se dan con base en patrones dinámicos y regulares de interacción y transacción social que se ubican entre los ámbitos de legalidad e ilegalidad-criminalidad» (p. 22).

5. Extractivismos locales tercerizados: el caso de San Antonio

En la creación de la nueva empresa minera local hay algunos aspectos a destacar que evidencian las transformaciones de las dinámicas mineras del Norte del Cauca. Mientras la minería de subsistencia se caracterizaba por su sentido asociativo, al vincular familias afrodescendientes y, en general, pobladores de una misma vereda o poblado, esta última fase del extractivismo en el Norte del Cauca se caracteriza por ser tercerizada; es decir, en la vereda cada propietario tiene en su predio entre dos y cinco excavaciones para sacar oro y subcontrata a trabajadores externos para pagar los servicios de explotación. Dependiendo de su extensión, emplea entre 30 y 150 trabajadores que vienen desde otras veredas o municipios buscando oro. Desde que se creó la asociación de propietarios de minas, quienes llegan a las minas subterráneas o cúbricas deben reportarse con los propietarios de los predios y pagar para poder trabajar allí (Esteban Ararat, comunicación personal, agosto 2016).

[187]

Otro aspecto es que las formas para la realización de la explotación minera se transforman. Del tradicional barequeo ahora es común encontrar las cúbricas, que son excavaciones en forma de agujeros profundos con dimensiones de un metro de ancho por un metro de largo y con más de diez metros de profundidad. En cada cúbrica se instala una polea, y ayudándose con arneses en cada una se introducen de ocho a quince hombres que van picando la roca en el subsuelo siguiendo la veta de oro. Afuera otro grupo recibe y lava las rocas y la arena que sale de la cúbrica en contenedores medianos de plástico. Al final de la cadena algunos campesinos siguen buscando con sus bateas el mineral en las piscinas que se forman al lado de la cúbrica con el agua que ha sido bombeada desde las entrañas de la tierra. Esta nueva forma de explotación, mucho más irregular, supone importantes riesgos para las personas que trabajan allí, además de importantes impactos ambientales que no han sido valorados.

Actualmente, hay quienes por fuera de la vereda siguen viendo con sospecha lo que sucede en San Antonio. Muchos de los miembros de los Consejos Comunitarios que componen la Aconc se oponen al ejercicio de

la nueva asociación ATO, argumentando que lo que allí sucede no tiene nada que ver con los proyectos de construcción colectiva del territorio de las comunidades ancestrales y, de hecho, atentan de forma directa contra estos, ya que en algunos casos vincula a empresas nacionales de fuera de la región. Mientras tanto, algunos líderes y propietarios de las minas de la vereda de San Antonio ven en estas nuevas formas locales de extractivismo una alternativa a la pobreza y una posibilidad de insertarse en el proyecto desarrollista, que además siempre ha estado presente en la zona plana de la región a partir del monocultivo de la caña y del desarrollo de las industrias. Esta nueva perspectiva que recae sobre la región da cuenta de la manera en que los procesos de colonización han sido sustituidos por un nuevo modelo basado en el rápido crecimiento económico, la intensificación de la extracción de recursos naturales, la proliferación de enclaves de desarrollo y nuevos procesos de urbanización que exacerban los conflictos por el acceso a la tierra.

[188]

Sin embargo, para comprender los impactos que han tenido este tipo de procesos sobre las comunidades locales en las cuales el extractivismo vino acompañado de la violencia para abrirse camino, es necesario considerar las respuestas de poblaciones como la de San Antonio. Allí, a partir de la apropiación de las estructuras de extracción de oro que habían sido instaladas por actores armados ilegales en sus territorios y del reordenamiento del sistema productivo a través de la creación de una asociación por parte de los propietarios de las parcelas, la gente logró responderle al extractivismo de enclave transnacional, más allá de las propuestas de resistencia, a través de su apropiación y de la vinculación directa a las formas del capital.

Esta situación, que marca la manera en que algunos sectores de pobladores del Norte del Cauca se relacionan con la actividad minera, rompe la dicotomía de lo tradicional y lo moderno, acercándonos a la noción de modernidades alternativas propuestas por el antropólogo Tathagatan Ravindran (2015), quien afirma que estas hacen referencia a la manera en que prácticas tradicionales y narrativas modernas se entrecruzan en la cotidianidad, dando origen a nuevas narrativas y prácticas que sustentan identidades alternativas que van más allá de la pureza y la resistencia al desarrollismo, como lo han planteado otros autores como Arturo Escobar (2015). A partir del estudio de las comunidades urbanas aymaras en El Alto, Bolivia, Ravindran (2015) da cuenta de la manera en que la construcción de la indigeneidad parte de suposiciones desarrollistas y modernizadoras para

dar forma a su discurso político de liberación, el cual, por su contenido, entra en tensión con aquel que busca la reivindicación a partir del distanciamiento radical de la modernidad.

Esta idea, muy ligada a lo que Stuart Kirsch (2009) llama «los oximorones de la minería», da cuenta de cómo en el territorio no solo se adopta el modelo extractivista sino también los discursos que lo rodean y que son producidos para convertir en «aceptable» una práctica que en principio no lo es. En este caso, la adopción del discurso de la *sustainable mining* (Kirsch, 2009) por parte de los actores locales para viabilizar el proyecto extractivista, ahora desde sus manos, nos hace pensar en los usos narrativos de conceptos como lo colectivo y lo artesanal, y la manera en que la manipulación de los mismos al interior de discursividades contradictorias se refleja en la obtención de beneficios como la aceptación de otros miembros de la comunidad para obtener el progreso local, mientras en los territorios se siguen produciendo geografías de acumulación de capital, marcada en algunos casos por la violencia.

Algunas reflexiones finales

Como mencionamos al principio de este artículo, este proceso [189] coincide con dos momentos clave que deben considerarse. Por un lado, al declararse Colombia constitucionalmente como una nación pluriétnica y multicultural,⁸ las poblaciones afrodescendientes e indígenas empezaron a ser reconocidas como sujetos étnicos merecedores de derechos especiales; por otro lado, el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto armado y al narcotráfico en el país. En el ámbito local, los dos momentos se encuentran y dan cuenta de la manera en que el auge de la minería ha exacerbado los niveles de violencia armada, afectando a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de forma directa.

Sin embargo, para comprender los impactos que han tenido este tipo de procesos sobre las comunidades locales en las cuales el extractivismo vino acompañado de la violencia para abrirse camino, es necesario considerar las respuestas de poblaciones como la de San Antonio. Allí, a partir de la apropiación de las estructuras de extracción de oro que habían sido instaladas por actores armados ilegales en sus territorios y el reordenamiento

⁸ Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. (6 de julio de 1991). Artículos 1 y 7.

del sistema productivo a través de la creación de una asociación por parte de los propietarios de las parcelas, la gente logró responderle al extractivismo de enclave más allá de la resistencia y lo convirtió en un proyecto propio. Para Tathagatan Ravindran (2015), este tipo de respuestas en las que actores locales logran articular tradiciones y lógicas modernas, dan cuenta de la producción de nuevas narrativas que empoderan en vez de marginar. En San Antonio, la producción de esas narrativas ha ido de la mano del proceso organizativo mismo, el cual, a su vez, ha dado origen a nuevos procesos políticos en el territorio.

Allí, quienes son propietarios de las tierras vieron en la asociación una forma de retomar el control de sus predios después de la llegada de actores armados y «paisas» con retroexcavadoras, que buscaban monopolizar los procesos extractivos y convertirlos en sus empleados; así como una estrategia para darle la vuelta al despojo producto de las lógicas del extractivismo de enclave.⁹

[190]

La toma del control de los medios de producción de extracción de oro en la zona rural de Santander de Quilichao por parte de quienes sistemáticamente habían sido marginalizados del proceso ha tenido sus efectos, sobre todo en la articulación entre elementos modernos y tradicionales. Aunque los empresarios del oro han reorganizado el lugar con el propósito de sacarle provecho a las vetas de oro que cada uno tiene bajo sus predios y aumentar así sus ganancias individuales, la estrategia de hacerlo bajo la figura de una asociación que les permita tener control de quiénes entran y salen de las minas, y de las transacciones con otros actores que se mueven en la zona interesados en las rentas ilegales del mineral, habla también de una idea colectiva del territorio.

De hecho, para Fabiana Li (2015), partir de la comprensión de este tipo de fenómenos y de cómo se entretejen relaciones entre actores que en principio aparecían como radicalmente opuestos permite darle mayor profundidad al análisis de los fenómenos sociales en escenarios extractivistas, más allá de la lectura en términos de la lucha por la tradición. Perspectiva que les ha significado a los empresarios de ATO romper,

⁹ Al referirnos al concepto extractivismo de enclave, retomamos la propuesta de Eduardo Gudynas (2011) sobre el desarrollo de economías extractivistas con muy pocos encadenamientos locales o nacionales en países que históricamente se han definido como «subdesarrollados» en el marco de un sistema de mercado globalizado.

hasta cierto punto, con redes y otras organizaciones colectivas locales de comunidades negras como Aconc, que integra diez municipios y más de cuarenta Consejos Comunitarios, que ha reivindicado durante varios años la lucha por la defensa territorial. Mientras la base de Aconc para defender los territorios nortecaucanos del despojo ha sido la narrativa de la resistencia, los empresarios del oro de Santander de Quilichao apelan al sincretismo y a la posibilidad de insertarse al desarrollo y «progreso» de la región, lo cual sin duda impacta en la cohesión social de las poblaciones afrodescendientes del Norte del Cauca.

Referencias bibliográficas

1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). (2015). Informe Diagnóstico Departamental Cauca. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2170.pdf
2. Aprile, Jacques. (1994). *Los pueblos negros caucanos y la fundación de Puerto Tejada*. Cali: Gobernación del Valle del Cauca.
3. Ararat, Lisifrey et al. (2013). *La Toma. Historias de territorio, resistencia y autonomía en la cuenca del alto Cauca*. Popayán: OTE, Pontificia Universidad Javeriana, Consejo Comunitario Afrodescendiente del corregimiento de La Toma.
4. Bray, John. (2003). Attracting Reputable Companies to Risky Environments: Petroleum and Mining Companies. In: Bannon, Ian & Collier, Paul (eds.). *Natural Resources and Violent Conflict. Options and Actions* (pp. 287-352). Washington, D. C.: The World Bank.
5. Caro, Catalina. (2014). Minería en el Norte del Cauca Indígena. Prácticas territoriales y transformaciones socioespaciales en los resguardos indígenas nasa del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. En: Göbel, Barbara y Ulloa, Astrid (eds.). *Extractivismo minero en Colombia y América Latina* (pp. 253-281). Bogotá, D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
6. Chivallon, Christine. (2008). La diáspora negra de las américas. Reflexiones sobre el modelo de hibridez de Paul Gilroy. En: Cunin, Elisabeth (ed.). *Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en América* (pp. 165-206). México, D. F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7. Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. (6 de julio de 1991). Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf>
8. Cruz Hoyos, Santiago. (2015, abril 30). Tras un año de la tragedia, mina de Santander de Quilichao sigue operando. *El País*. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/colombia/tras-un-ano-de-la-tragedia-mina-de-santander-de-quilichao-sigue-operando.html>

[191]

9. Escobar, Arturo. (2015). *Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida redes*. Popayán: Universidad del Cauca.

10. Espinosa, Adriana. (2011). De lo global a lo local en los repertorios de acción de las organizaciones negras frente al conflicto armado en Buenaventura. *Revista CS*, 7, pp. 81-120. <https://doi.org/10.18046/recs.i7.1039>

11. Friedemann, Nina S. y Espinosa, Mónica. (1994). La familia minera en el Litoral Pacífico. En: Leyva, Pablo (ed). *Colombia Pacífico. Tomo II* (pp. 560-569). Bogotá, D. C.: Fondo para la Protección del Medio Ambiente José Celestino Mutis.

12. Gudynas, Eduardo. (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En: Wanderley, Fernanda (coord.). *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina* (pp. 379-410). La Paz: CIDES UMSA, Oxfam.

13. Guzmán, Álvaro y Rodríguez, Alba. (2014). Reconfiguración de los órdenes locales y conflicto armado: el caso de tres municipios del Norte del Cauca (1990-2010). *Sociedad y Economía*, 26, pp 155-184.

Humphreys, M. (2005). Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution Uncovering the Mechanisms. *Journal of Conflict Resolution*, 49 (4), pp. 508-537. <https://doi.org/10.1177/0022002705277545>

14. Jaramillo, Jefferson; Londoño, Natalia y Sánchez, Gina. (2015). Agroindustria azucarera y finca tradicional en el norte plano del Cauca (Colombia). Perspectivas históricas y claves etnográficas. *Memoria y Sociedad*, 19 (39), pp. 30-47. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.mys19-39.aaf>

[192]

15. Kirsch, Stuart. (2009). Sustainable Mining. *Dialectical Anthropology*, 34 (1), pp.87-93. <https://doi.org/10.1007/s10624-009-9113-x>

16. Le Billon, Philippe. (2013). *Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources*. London, New York: Hurst and Oxford University.

17. Li, Fabiana. (2015). *Unearthing Conflict. Corporate Mining, Activism and Expertise in Peru*. Durham: Duke University.

18. López, María Jimena. (2014). Acción colectiva, identidades políticas y conflicto armado: la etnización de una comunidad negra en el Norte del Cauca. *Trans-Pasando Fronteras*, 6, pp. 55-82. <https://doi.org/10.18046/retf.i6.1938>

19. Massé, Frédéric y Camargo, Johanna. (2012). *Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia. v informe*. Bogotá, D. C.: CITpax Colombia. Observatorio Internacional, Ley de Justicia y Paz.

20. Taussig, Michael y Rubbo, Anna. (2011). *Esclavitud y libertad en el Valle del Río Cauca*. Bogotá, D. C.: Universidad de los Andes.

21. Ministerio de Minas y Energía. (2015). Glosario técnico minero. Recuperado de <https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/GLOSARIO+MINERO+FINAL+29-05-2015.pdf/cb7c030a-5ddd-4fa9-9ec3-6de512822e96>

22. Procuraduría General de la Nación. (2012). Minería ilegal en Colombia. Informe preventivo. Recuperado de <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/MINERIA%20ILEGAL%20EN%20COLOMBIA%20%20DOCUMENTO.pdf>

23. Ravindran, Tathagatan. (2015). Beyond the Pure and the Authentic: Indigenous Modernities in the Andean Bolivia. *AlterNative*, 11 (4), pp. 321-333. <https://doi.org/10.1177/117718011501100401>

24. Rettberg, Angelika y Ortiz, Juan Felipe. (2014). Conflicto dorado: canales y mecanismos de la relación entre minería de oro, conflicto armado y criminalidad en Colombia. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2418883>

25. Rudas, Guillermo. (2010, 27 de agosto). *Dinámica de la minería en Colombia y retos de la política ambiental. Algunas tendencias recientes*. Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales. Sesión II. Gobernanza y Gobernabilidad Ambiental en Colombia. Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Bogotá, D. C.

26. Schultze-Kraft, Markus. (2016). Órdenes criminales: repensando el poder político del crimen organizado. *Íconos*, 55, pp. 25-44. <https://doi.org/10.17141/iconos.55.2016.1899>

27. Urrea, Fernando y Hurtado, Teodora. (1997). Puerto Tejada: de núcleo urbano de proletariado agroindustrial a ciudad dormitorio. En: Zuluaga, Francisco (ed.). *Puerto Tejada 100 años* (pp. 197-244). Puerto Tejada: Alcaldía Municipal.

28. Valencia, Inge Helena. (2017). Cultivos ilícitos y minería ilegal: Algunos retos del postconflicto en la región del Pacífico. *Análisis FES*. Recuperado de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/13224.pdf>

29. Valencia, Inge Helena; Silva Chica, Laura y Moreno Moreno, Alejandro. (2016). Violencia, desarrollo y despojo en Buenaventura. *Análisis FES*. Recuperado de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/12685.pdf>

30. Vélez, Irene; Varela, Daniel; Rátiva, Sandra y Salcedo, Andrés. (2013). Agroindustria y extractivismo en el Alto Cauca. Impactos sobre los sistemas de subsistencia afrocampesinos y resistencias (1950-2011). *Revista CS*, 12, pp. 157-188. <https://doi.org/10.18046/recs.i12.1680>

31. Viáfara, Carlos; Urrea, Fernando y Correa, Juan. (2009). Desigualdades sociodemográficas y socioeconómicas, mercado laboral y discriminación étnico-racial en Colombia: análisis estadístico como sustento de acciones afirmativas a favor de la población afrocolombiana. En: Mosquera, Claudia y Díaz, Ruby (eds.). *Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre bicentenarios de las independencias y Constitución de 1991* (pp. 153-346). Bogotá, D. C.: Universidad Nacional de Colombia.

32. Wilson, Peter J. (2004). *Las travesuras del cangrejo. un estudio de caso caribe del conflicto entre reputación y respetabilidad*. Bogotá, D. C.: Universidad Nacional de Colombia.

33. Winer, Jonathan & Roule, Trifin. (2003). Follow the Money: The Finance of Illicit Resource Extraction. In: Bannon, Ian & Collier, Paul (eds.). *Natural Resources and Violent Conflict. Options and Actions* (pp. 161-214). Washington, D. C.: The World Bank.